

Una valla entre el Norte y el Sur

El actual vallado de Ceuta y Melilla se levantó a mediados de los noventa, tras una gran sequía en África. Este año 2005 una hambruna severa golpea a los países del Sahel, la frontera sur del Sahara, consecuencia de una letal combinación de sequía y langostas. Cuatro millones de hectáreas han quedado devastadas. Se anunció una intensa oleada migratoria. Efectivamente, los acontecimientos en torno a las vallas se han sucedido en un «crescendo» al que los políticos dan respuestas precipitadas. Son sólo la espuma de un problema de fondo cuya solución, con voluntad política, exigirá largos esfuerzos.

Mientras que el año pasado sólo hubo dos intentos masivos de saltar las vallas, en los diez primeros meses del presente año se han registrado hasta treinta. De fines de setiembre a mediados de octubre, más de 400 emigrantes consiguieron pasar de este lado de las vallas y se contabilizaron 14 muertos. Pero las drásticas medidas tomadas por España y Marruecos no han conseguido amedrentar a otros candidatos, ya que, según el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, otros 20.000 en Argelia y 10.000 en Marruecos siguen esperando su oportunidad para «dar el salto». Prefieren jugarse la vida a seguir en la miseria y la humillación.

Estudiosos de esta región del planeta prevén que en los próximos 25 años se registrará un importantísimo aumento de esta emigración hacia Europa debido a la disgregación económica, política y social de los países subsaharianos, que han quedado excluidos de los procesos económicos de la globalización. Aunque estaban anunciadas, las avalanchas de octubre nos han pillado a todos por sorpresa. ¿Pasará lo mismo con las que se anuncian para los próximos años?

«Unas imágenes aterradoras»

El viaje de los subsaharianos hasta Ceuta y Melilla es mucho más que una odisea: puede durar entre dos y cinco años, durante los cuales se van ganando el dinero necesario para sobrevivir, sobornar a policías y aduaneros, y acercarse a su meta, hasta quedar atrapados —los más pobres— en los bosques cercanos a estas dos ciudades: la espera en las ciudades marroquíes y el pasaje en patera son demasiado caros para ellos. De hecho, algunos conseguían colarse. Además, durante el último año, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y la cooperación con Marruecos habían reducido en un 50% el acceso ilegal por vía marítima.

En 1992 se firmó entre España y Marruecos un acuerdo para la repatriación solamente de marroquíes, que apenas se ha aplicado (solamente en 114 casos), por lo que ahora se le considera ineficaz y caduco.

El salto cuantitativo del presente otoño ha producido escenas e imágenes que han sacudido a la opinión por motivos diversos. Disparos de fusil sobre asaltantes desarmados (paradójicamente, las muertes se produjeron cuando más estrecha era la colaboración entre ambos lados de la frontera melillense). Devolución a Marruecos de 73 «asaltantes» en supuesta **contravención del artículo 157 del Reglamento de Extranjería**, que prescribe proporcionar intérprete y asistencia jurídica al demandante (operación en la que intervinieron los dos monarcas). Expulsiones de subsaharianos en autobús, esposados de dos en dos, hasta las fronteras de Argelia o Mauritania (no olvidar que España expulsó hace unos años a emigrantes ilegales, drogados y esposados). Cientos de emigrantes abandonados en pleno desierto sólo con un poco de agua y comida. Algunos eran localizados por el

Polisario junto al muro del Sahara, en terrenos sembrados de minas, sedientos, hambrientos, con hipotermia, los pies destrozados de caminar sin rumbo y la piel resquebrajada por el sol. A otros les habían disparado para que no trataran de volver a zonas habitadas. Unas «*imágenes aterradoras*» en expresión del portavoz de la comisaría europea de Desarrollo y Ayuda Humanitaria.

Los defensores del Derecho no dejaron de alzar su voz. La adjunta primera del Defensor del Pueblo (español) se mostró muy crítica con las «*expulsiones inmediatas*» y calificó de «*genocidio*» los métodos empleados por las autoridades marroquíes. Por su parte, el obispo de Málaga, diócesis a la que pertenece Melilla, reclamó la intervención de la Unión Europea y de la ONU para buscar «*una solución acorde con su dignidad*» [de los emigrantes].

La presión migratoria

Lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur no es un fenómeno aislado. Actualmente hay **200 millones de emigrantes en nuestro planeta**. La economía de los países desarrollados necesita más mano de obra, aunque no puede dar trabajo a tantos candidatos. Por otra parte, el carácter dramático de los recientes acontecimientos no debe hacer olvidar que la mayor avalancha de entradas ilegales en España se produjo entre los años 2000 y 2004.

Los métodos tan arriesgados de los emigrantes africanos tienen una explicación en el hecho de que el estrecho de **Gibraltar es la frontera más desigual del mundo** desde el punto de vista económico. El PIB de España es quince veces superior al de Marruecos (peor aún: un 40% de los africanos dispone de menos de un euro diario), mientras que el de Estados Unidos «sólo» es seis veces superior al de México. La desigualdad entre los dos lados de la frontera es la que proporciona el impulso para el «salto». Una desigualdad que los candidatos a la emigración pueden contemplar a diario en las pantallas de la televisión. Éste es el verdadero «**efecto llamada**».

Si los norteamericanos no consiguen detener el flujo de «*espaldas mojadas*» (a pesar del complejo arsenal utilizado –incluidos los asesinatos a manos de civiles armados que patrullan por su cuenta–),

menos lo conseguirán las medidas policiales que, a pesar de todo, habrá que seguir empleando también a este lado del Atlántico. **«No hay indicios de que la presión migratoria disminuya a corto plazo, sino de que aumente»**, según el comisario F. Frattini.

En este punto, los vaticinios de los expertos coinciden con la determinación de los inmigrantes africanos: *«vamos a volver a intentarlo, regresar a nuestras casas sin dinero no es una opción; nos quieren matar, pero da igual, llegaremos a España como sea»*, declaraban unos subsaharianos a los que se había alejado hasta el muro del Sahara.

Sorprende por ello que un diario madrileño haya hablado de *«sarampión viajero»* para designar este fenómeno humano, añadiendo además con rotundidad que, en estas personas, *«puede más el deseo de emigrar que la razón»*. Esto se escribe en un país con siglos de emigración hacia América, por no hablar de la reciente a Europa. ¿Por qué en un caso la emigración habría sido racional, mientras que en el otro no obedecería más que a pura irracionalidad? ¿Profesionales de la información pueden ignorar las razones del presente flujo migratorio? ¿Qué prejuicios son los que llevan a tales conclusiones?

Esta presión migratoria ha afectado de una manera particular a Marruecos y España. Y la UE comienza a tomar conciencia de que también es un problema suyo.

Marruecos

En la reciente crisis de las vallas, Marruecos ha jugado el papel de *«malo de la película»*. Ya lo venía haciendo desde antes. Según *Médicos sin Fronteras*, en los diez últimos años habrían muerto en el Norte de Marruecos unos 6.300 inmigrantes por patologías debidas a la extrema precariedad de sus condiciones de vida y a la represión policial. Su Administración ha sido acusada en repetidas ocasiones de connivencia con las mafias que explotan a los inmigrantes, a los que los mismos policías se permitirían robarles dinero y móviles. Su colaboración con las ONG deja igualmente mucho que desear. La *Asociación pro Derechos Humanos de Marruecos* protestó principalmente por el hecho de que seis emigrantes fueran tiroteados incluso antes de acercarse a la valla

fronteriza. Y la Asociación Abdelkrim de Alhucemas acusó a Mohamed VI por haber permitido que el ejército disparara contra seres indefensos.

Finalmente, el terrible impacto mediático de los inmigrantes abandonados en el Sahara obligó a rectificar: estaban dando la imagen de «un país de bárbaros», según la revista marroquí *La Vie économique*, nada beligerante en general con las autoridades. La excusa presentada por algunas autoridades, según la cual el abandono de emigrantes en el desierto constituía una «estrategia de presión» sobre sus países de origen para que éstos aceptaran su repatriación, agrava aún más tal proceder. Posteriormente, optó por el método más civilizado de organizar puentes aéreos.

Sin embargo algo parece haber cambiado. El 24 de octubre el Ministerio del Interior marroquí reconocía «errores de gestión en el fenómeno de la emigración ilegal» admitiendo que sus fuerzas en el perímetro fronterizo de Melilla se habían visto desbordadas. Y concluía «deplorando el sesgo dramático de los acontecimientos y manifestando su profundo pesar por la pérdida de vidas». Un gesto destinado sin duda a lavar su deteriorada imagen en el continente africano.

Y es que Marruecos tuvo que hacer frente en solitario a la avalancha migratoria. Además, con una insuperable escasez de medios para controlar, en primer lugar, sus largas fronteras con Argelia y Mauritania. Para su vecina del Este, dejar paso libre a los emigrantes hacia el Oeste es una forma de presionarle en el contencioso fronterizo que mantienen desde hace décadas. Por vez primera, el 3 de octubre Rabat planteó a Argel una acción conjunta en esta materia. Su vecina del Sur, más pobre aún que Marruecos, se niega a colaborar en cualquier forma de repatriación. Y por parte de la UE, hasta la fecha las presiones han abundado más que las ayudas.

España

También al Gobierno español le pilló un tanto desprevenido la violencia de los últimos asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla. «Batalla casi a diario en la frontera», titulaba la prensa. Aunque el actual ejecutivo había hecho un gran esfuerzo por mejorar las relaciones con el reino alauí,

sin embargo la cooperación en materia de inmigración dejaba mucho que desear, obstaculizada por mutuas suspicacias. ¿No estarían los marroquíes aprovechándose de la crisis para desestabilizar a las dos ciudades autónomas bajo soberanía española? Los primeros días de la crisis fueron de gran desconcierto y precipitación: se improvisaron medidas, como el envío a la valla de soldados sin preparación ni material adecuado. La militarización del problema constituía un gran riesgo. Se buscó por todos los medios la colaboración de Marruecos. El ministro Moratinos llegó, con este fin, a apoyar la dispersión de emigrantes en el Sahara, felicitó a Rabat por los esfuerzos desplegados e incluso mantuvo que nuestros vecinos del Sur estaban respetando los derechos humanos de los subsaharianos (la víspera, el mismo ministro había exigido de ellos respeto a los derechos de los «sin papeles»). Pronto los dos países acordaron crear una comisión permanente para la resolución de estos problemas.

Pero el acercamiento a Marruecos y a sus métodos de protección de la frontera le costó a nuestro Gobierno la acusación por parte de *Amnistía Internacional* de «*graves y repetidas violaciones*» de los derechos humanos; ésta en concreto: «*a muchas de las personas gravemente heridas que consiguieron entrar en territorio español las empujaron de vuelta al otro lado de la valla sin formalidad legal alguna y sin asistencia médica*». Pagamos también, pues, nuestro tributo mediático, particularmente ante los africanos que viven en nuestro territorio.

La geografía había puesto a España en el puesto más avanzado de la prosperidad. Ello explica, en parte, el hecho de que en 2004 recibiéramos a una tercera parte de todos los inmigrantes que llegaron a la UE y que, por tasa de inmigración, ocupáramos el segundo lugar con un 14,3 por mil, sólo superados por Chipre –21,3 por mil-. Lo más urgente era frenar las oleadas de «invasores». Pronto se evidenció que un buen entendimiento con Marruecos, siendo una condición necesaria, no era suficiente.

La contribución económica inmediata concedida a Marruecos consiguió una mayor colaboración y supuso un respiro para España. Pero Marruecos es, ante todo, un lugar de paso para otros inmigrantes. Y nuestro Gobierno se encontraba desarmado ante estos últimos: carecía de convenios de repatriación con los seis mayores «donantes» africanos

de clandestinos. Por ello, declaró el día 21 en el transcurso de un debate parlamentario que incrementaría la colaboración con África y buscaría acuerdos de readmisión con Senegal, Mali, Guinea-Conakry, Camerún y Gambia. Loables propósitos. Pero muy poco realistas, si se limitan a una colaboración meramente interestatal. ¿Qué proyecto sólido de desarrollo podemos ofrecer a todos esos países? España también se encuentra desbordada por el problema.

La Unión Europea

Desde la aprobación del **espacio Schengen**, el problema de la inmigración –tanto africana como asiática o latinoamericana–, afecta a toda la UE. Según estimaciones conjuntas de Francia y Alemania, unos 25.000 «sin papeles» procedentes del África negra han pasado este año de España a otros países de la UE, mientras que otros tantos irregulares permanecen en España tras la última regularización. Por ello, es absolutamente necesario que la UE se dote de un programa serio capaz de frenar la presente avalancha. Los 27 líderes europeos reunidos el 27 de octubre en la cumbre informal de Hampton Court prestaron un apoyo decidido al plan integral y urgente para controlar la inmigración ilegal, propuesto por R. Zapatero, un plan que debe concretarse en el Consejo Europeo de diciembre. Por ahora no es más que eso: un plan.

El despertar se está produciendo, pero faltan medios de intervención. La *Agencia de Control de Fronteras* y sus correspondientes *Fondo de Control de Fronteras* y *Fondo para el Retorno de Inmigrantes Ilegales*, creados el pasado mes de mayo, todavía no son operativos. Además, la UE sólo ha firmado acuerdos de repatriación con Rusia. Hace solamente dos años, muchos de los veinticinco rehuían todo planteamiento de acción conjunta en materia de inmigración: hay, pues, cierto progreso.

Franco Frattini lleva dos años y medio intentando negociar con Marruecos un acuerdo de readmisión de inmigrantes. El diálogo está estancado porque Rabat acepta el retorno de sus ciudadanos, pero no el de los subsaharianos. Otros países del Magreb han recibido presiones en el mismo sentido. El 12 del pasado mes, los ministros de Interior de los 25 analizaron los acontecimientos de Ceuta y Melilla, ofrecieron

solidaridad y apoyo a España y Marruecos. Es todo lo que se ha hecho hasta la fecha. No se puede hablar, pues, de una verdadera política común de inmigración.

Ese mismo día, el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, acompañado por el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA) y ex presidente de Mali, Alpha Omar Konaré, presentó un plan de *«asociación estratégica para la seguridad y el desarrollo»* entre la UE y África, ya que –argumentó– *«el problema de la inmigración no se puede resolver eficazmente a largo plazo si no es en el marco de una cooperación al desarrollo ambiciosa y coordinada que permita atacar a sus causas profundas»*. De nuevo, una declaración de intenciones sin fechas ni presupuestos.

Algunos miembros de la UE (en particular, Italia y el Reino Unido) han lanzado la idea de crear en Libia, Argelia, Túnez y Marruecos, campamentos donde los inmigrantes clandestinos podrían tramitar su derecho de asilo en Europa, es decir, una manera de «externalizar» el problema migratorio, haciendo de los países del Magreb los gendarmes de la UE. De hecho, la Comisión Europea ha rechazado ese proyecto y el Parlamento europeo lo ha declarado incompatible con los derechos fundamentales.

Por el momento, ayudar a Marruecos se considera lo más urgente, proporcionándole los medios necesarios para controlar la emigración. Incluso se está diciendo que habría que ofrecerle un nuevo *«plan Marshall»*. Pero un proyecto tan ambicioso demanda, por parte del beneficiario, una infraestructura democrática y administrativa de la que a todas luces carece, al mismo tiempo que la supresión del apoyo incondicional que el actual régimen recibe por parte de Estados Unidos y Francia.

La ONU

Las Naciones Unidas se han visto implicadas también en la crisis de las vallas. K. Annan advirtió que había que abordar el problema con un enfoque intercontinental y que la solución debía buscarse *«respetando los derechos humanos»*.

De hecho, la **Minurso** (la misión de la ONU en el Sahara Occidental) participó activamente, a pesar de las protestas de Marruecos, en la localización y ayuda a los emigrantes que habían sido abandonados en el desierto. Por su parte, el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) ya había enviado a tres equipos de trabajo a Ceuta, Melilla y Canarias y otro se preparaba a partir para Marruecos. Este Alto Comisionado calculaba que en el *Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)* de Melilla podían contabilizarse, a mediados de mes, entre 100 y 150 candidatos al asilo político. Posteriormente, investigó lo que se estaba haciendo en los 28 autobuses con los que se dispersó a los subsaharianos. Ante los continuos obstáculos que opuso la administración de Rabat, el organismo de la ONU denunció que no se le había permitido el acceso a personas demandantes de asilo y en situación preocupante y que no había recibido información sobre la suerte de 85 personas por las que había preguntado.

El Gobierno de Madrid fue también objeto de las críticas de esta Organización internacional, ya que, finalmente, Marruecos deportó el día 23 de octubre a 49 ciudadanos de Mali que España había devuelto ilegalmente al otro lado de la valla el 6 del mismo mes. Según el ACNUR, dos de estos expulsados habían pedido asilo político a Rabat y lo habían intentado también en España (el ministerio de Interior lo ha negado), por lo que calificó estos hechos de «grave incumplimiento de la *Convención de Ginebra*».

A la raíz del problema

Obviamente, el *corto plazo* tiene sus urgencias que no admiten demora. Las brechas que han quedado abiertas en la fortaleza europea han de ser taponadas lo antes posible. Los lamentables acontecimientos de Melilla no deben repetirse. A sabiendas de que ninguna valla va a resolver el problema.

A *corto y medio plazo*, será necesario intensificar la **ayuda** al continente africano, sobre todo a nuestro vecino Marruecos, no por ser el país más necesitado de ella, sino por puro interés propio. Indispensable parece la ayuda para la formación de las fuerzas del orden. Al mismo

tiempo que se apoya la acción humanitaria de las ONG y, sobre todo, la del ACNUR, representante en este tema de la legalidad internacional. Pero las dimensiones del problema no permiten confiarlo todo a acciones humanitarias y a la «generosidad» de los países ricos.

También a medio plazo, la UE (sin olvidar la responsabilidad de los demás países industrializados) debería implicarse de verdad en la **prevención de conflictos**, empezando por denunciar a las propias empresas que se benefician de las diversas guerras africanas del diamante o del coltán y exigiendo de los países africanos de su esfera de influencia un mínimo respeto de los derechos humanos. Una buena parte de los emigrantes huye de la devastación causada por esos conflictos.

Pero más numerosos aún son los que huyen de la miseria creada por el no respeto a las reglas del **libre comercio** del que los países industrializados del Norte se presentan como abanderados. La agricultura africana no puede desarrollarse cuando los países africanos se ven forzados a abrir sus fronteras al trigo, la carne y la leche subvencionados por la UE y los EE UU (las subvenciones agrícolas de estas dos potencias suman más de 1.000 millones de dólares al día). Mientras que su algodón, su azúcar de caña o sus plátanos apenas consiguen superar las barreras aduaneras que han levantado esos mismos países ricos. Los africanos no son los únicos culpables de que su comercio sólo alcance el 2% del comercio mundial, con una población que representa el 15% del total y que sigue creciendo a pesar de tanta miseria.

La solución de este problema de fondo exigirá preparar a la opinión pública de los países ricos a **aceptar duros ajustes en sus agriculturas**. Sin esta voluntad, hablar de «planes Marshall» es vender humo. Los partidos políticos —que en la práctica monopolizan el poder— deberán algún día informar a la opinión y no limitarse a incidir demagógicamente en los temas de política interior de los que sacan sus votos. ■